

Daniel Ortega, elección democrática o golpe blando

SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO :: 11/09/2021

La derecha se ha preparado con tiempo para el golpe blando

El 7 de noviembre serán las elecciones en Nicaragua, pequeño país del corazón centroamericano. Lo que venga después está en el aire. Por lo pronto, a partir del miércoles 1 de septiembre Daniel Ortega, actual presidente en funciones, está ya registrado como candidato en busca una tercera reelección y un quinto mandato.

No es casual sino causal la inconformidad de amplios sectores de la sociedad nicaragüense con el presidente Ortega, que pretende continuar en el poder acompañado de su esposa, Rosario Murillo, en el cargo de vicepresidenta por cinco años más. Ortega fue presidente en 1985-1990, 2007-2012 y ahora en 2017-2021.

Esa es la razón principal por la cual el exlíder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no tiene todas las de ganar: le esperan algunas complicaciones. Por si fuera poco, la economía no marchaba bien y se agravó con la pandemia del covid-19.

Para una evaluación de la situación política, primero hay que ver la presión en contra del presidente, a partir de la entrada en vigor de la reforma al sistema de seguridad social en 2018 que le creó un rechazo generalizado -de la derecha y las clases medias, no de las mayoritarias clases bajas-. Presión por la respuesta violenta contra los manifestantes violentos y el uso de la fuerza pública del Estado.

La violencia social derivó en amenazas del exterior como respuesta. Claro que Washington se pinta solo para generar desestabilización política y social en los países latinoamericanos; la reforma de 2018 fue aplicada a sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La campaña interna de los medios de comunicación encendió acusaciones como: autócrata, dictador, chavista enquistado en el poder, nepotista, etc. Sin embargo, algunas críticas han sido ganadas a pulso por el presidente Ortega, mientras que otras, la mayoría, porque han sido soterradamente inducidas.

Sobre esto último --por ejemplo--, la reforma fue más una trampa orquestada por el FMI, armada además con el apoyo de la derecha empresarial agrupada en torno al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); más argucia preparada que salida al déficit del sistema de salud.

Los antecedentes de la reforma

Dicho sea que la crisis social y política que vive Nicaragua se gestó desde afuera en 2018 y se agudizó con la pandemia en 2020. No obstante, las expectativas de la población son que las condiciones de vida mejoren con las elecciones de noviembre. El asunto es que la solución no apunta precisamente a ello.

En tanto, la desestabilización -social, política, económica- comenzó por lo siguiente:

1. Las protestas de 2018, que de abril se extendieron al resto del año --con secuelas hasta 2021--, mostraron el descontento de patronal y clases medias a las reformas del sistema de seguridad social (el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, que cayó en déficit desde 2013) del gobierno de Ortega. La situación de protesta obtuvo como respuesta la represión, con un saldo de 264 muertes y 1.800 heridos (datos de la CIDH); además hubo también detenidos, encarcelados, torturados y juicios discrecionales. También personas exiliadas: al menos 8.000 huyeron a Costa Rica por la violencia.

Cierto es que en 2013 el INSS entró en un déficit que para 2017 alcanzaría 2.186 millones de córdobas, y Ortega pondría en marcha la reforma porque las reservas se agotarían en 2019. Las medidas implicaban un costo fiscal: aumento en la contribución de empresas y empleados; reforma fiscal y nuevo impuesto para jubilados del 5 porcentual.

Anunciadas para entrar en vigor el día 18, las medidas en aportaciones al INSS eran como sigue: 0.75 por ciento para empleados y 2 por ciento para empresarios, con un incremento anual hasta llegar al 22.5 por ciento en 2020. Habría una reducción del 5 por ciento en las pensiones. Mientras los sindicalizados y empleados de la UNE [empleados públicos] apoyaron, la patronal COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) la rechazó.

Entonces, el día de entrada en vigor de la reforma, la coalición derechista (el Frente Amplio por la Democracia), feministas y estudiantes universitarios se manifestaron frente al INSS en ciudad de León. Ahí fueron los enfrentamientos, el conflicto escaló en días posteriores y hubo protestas en importantes ciudades como Granada, Estelí y la propia Managua.

2. Las movilizaciones continuaron hasta la exigencia de la *renuncia* del presidente Ortega. Demanda motivada por la reacción del gobierno a las protestas violentas con el uso de la fuerza pública, y la creación de un ambiente de hostigamiento con el despliegue constante de policías y grupos civiles progubernamentales armados para intimidar a la derecha. Eso le valió al presidente las denuncias desde los sectores inconformes con la situación, el rechazo de los empresarios, los estudiantes y los terratenientes.

El otro aspecto por el cual perdió terreno Daniel Ortega es el acoso de los medios de comunicación: prensa, radio y revistas digitales, cuyos voceros reclaman libertad de expresión --ellos son parte de la derecha opositora--, la detención de algunos directivos de medios y periodistas. Por eso para la OEA el gobierno de Ortega es una "dictadura". Hablamos de Luis Almagro...

El presidente calificó a la prensa de "pequeños grupos de oposición, financiados por EEUU". Junto con la OEA, unos 13 países de la región, la CIDH, Naciones Unidas, la Unión Europea y Washington generalizaron las presiones desde afuera. Claro que la reforma se echó para atrás, pero las demandas contra Ortega continúan.

El injerencismo es golpismo

Por supuesto nadie ignora, dentro ni fuera de Nicaragua, que a nombre de la "democracia", la "libertad" y los "DDHH", los EEUU están siempre prestos a intervenir bajo cualquier

argucia en el despectivo reducto de la doctrina Monroe, su "patio trasero".

Tampoco que, para operar en la región, como en cualquiera parte del mundo, el imperio echa mano primero de la derecha local para emprender tareas de desestabilización y luego de todo su arsenal disponible, como embajadas, agencias como la USAID, la CIA y la antidrogas (DEA); OEA; su brazo militar y el pago de mercenarios.

Los organismos injerencistas son agentes promotores de violencia bajo el ardid del combate al narcotráfico o la lucha contra el terrorismo. En todo caso se trata de acciones terroristas desde un Estado terrorista como es EEUU.

Valgan como ejemplo los golpes de Estado siguiendo las tesis de Gene Sharp, del golpe blando, para derrocar a gobiernos no afines a los intereses imperiales. Que para ello son los financiamientos a partidos y organizaciones de las derechas golpistas regionales.

Las manifestaciones de protesta generadas desde afuera son ideales para la introducción de golpistas e infiltrados violentos, pago de civiles y agentes; generación de climas de rompimiento social. El mayor o menor éxito de dicha estrategia *sharpista* se debe al grado de fragilidad de la institucionalidad. Y en Nicaragua la situación es por lo menos delicada.

La contratación de mercenarios está destinada a crear ejércitos bajo el paraguas de la sociedad civil, con fines criminales como el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití, o las amenazas permanentes contra presidentes como Nicolás Maduro en Venezuela u Ortega de Nicaragua.

Dentro de ese ambiente de rompimiento del orden institucional, ciertamente en proceso de consolidación, y a sabiendas de que el financiamiento externo siempre encuentra destinatarios en traidores agrupados en torno a una derecha que no escatima abrazar el golpismo o las dictaduras modernas al estilo de Jair Bolsonaro en Brasil o Jeanine Áñez en Bolivia, Iván Duque en Colombia o Guillermo Lasso en Ecuador.

Conocido es que ni republicanos ni demócratas del imperio, que justifican el injerencismo con la "Doctrina Monroe", ven con buenos ojos a presidentes como los de Cuba, Bolivia, Argentina, Nicaragua, México o Venezuela. Gobernantes pronacionalistas, como Díaz-Canel, Luis Arce, Alberto Fernández, López Obrador o Maduro, respectivamente.

Por eso el golpismo está de moda. El *golpe blando* está en marcha en los países mencionados. Un proceso que se desata por etapas. Es la estrategia desestabilizadora vía el golpismo financiado desde los EEUU donde agencias de "espionaje" como las embajadas en la región Latinoamericana están siempre prestas a derrocar gobiernos contrarios a Washington.

Elecciones, el caldo de cultivo

El próximo 7 de noviembre se elige presidente. El 2 de agosto se registraron siete fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente. Entre ellas Daniel Ortega y su esposa, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, del FSLN.

Se vota también a 90 diputados a la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Las campañas comenzaron el 21 de agosto y terminan el 3 de noviembre, de acuerdo a la ley electoral y el Consejo Supremo Electoral. Habrá resultados preliminares el día 15. Será el 10 de enero la toma de posesión del nuevo presidente, en tanto el 9 los diputados a la Asamblea.

La policía de Nicaragua ha reportado que a la fecha ha detenido a 34 políticos opositores, entre ellos a siete precandidatos que no pudieron inscribirse. Tres de ellos acusados "oficialmente" de cometer el delito de "conspirar para cometer menoscabo a la soberanía nacional".

Cristina Chamorro, por ejemplo, está en arresto domiciliario acusada por "gestión abusiva" y lavado de dinero durante su gestión al frente de la Fundación Violeta Barrios. Ella ha declarado: "No soy candidata oficial y pretenden inhibirme, qué miedo le tienen al cambio. Unida Nicaragua volverá a ser república", dijo Chamorro.

Otras voces fuertes igual se pronuncian. El juicio de José Mujica, expresidente de Uruguay, expresado ante el Senado de su país, fue -como siempre que habla de gobiernos progresistas- lapidario: "Siento que algo que fue un sueño se desvía, cae en autocracia y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido de que en la vida hay momentos en los que hay que decir, me voy".

Conflicto postelectoral

El conflicto postelectoral es casi seguro. Porque Daniel Ortega no la tiene fácil. Le irá bien si gana por amplio margen. Él apunta a la continuidad progresista. Y como sea que gane será una "elección fraudulenta" para la derecha y los medios; vendrán las denuncias y el desconocimiento de resultados, así como del "ganador".

La desestabilización por las fuerzas derechistas es previsible, como sucedió en 2018, de la mano de los señalamientos de la CIDH y la OEA, Naciones Unidas, el Congreso de EEUU y el Parlamento Europeo.

En fin. La elección será democrática si gana la derecha; si no, *golpe blando*, esa parece ser la disyuntiva. Solo queda en claro una cosa: que sin voluntad política para una elección transparente, limpia y democrática, no habrá un presidente legítimo en Nicaragua con los consensos necesarios para resolver los problemas del país.

La amenaza del *golpe blando* --forma moderna de golpe de Estado--, entrará en acción. Además, la derecha se ha preparado con tiempo; al menos de 2018 a la fecha.

Esa es la principal amenaza hoy, operada internamente sí, pero promovida y financiada por factores externos. ¿Quién es el principal promotor? Si grazna como pato y camina como pato, ya se sabe de quién se trata.

CALPU